



# Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cárceo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 20 rs. trimestre para esta capital, y 50 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

## PARTE OFICIAL.

### PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en esta Corte en su importante salud.

### ARTICULO DE OFICIO.

#### GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 136.

La Dirección general del Tesoro en 25 de febrero dice á este Gobierno de provincia lo que sigue.

Destinadas á satisfacer necesidades perentorias y apremiantes las sumas que á los Ayuntamientos, Establecimientos de Beneficencia e Instrucción pública y demás corporaciones civiles, les corresponda percibir á tenor de lo dispuesto en la Real orden fecha 27 de diciembre del año próximo pasado trasmisada á V. S. por esta Dirección en 8 del mes actual; y deseosa la misma de que no queden desatendidas dichas necesidades, ha estimado oportuno autorizar á V. S. para que ordene desde luego la entrega del importe á que asciendan las referidas sumas, á reserva de comprenderlas después en distribución, para cuyo efecto dispondrá V. S. que se incluyan precisamente en el primer pedido de fondos que siga á su entrega, con aplicación al capítulo que corresponda y la expresión de cantidades satisfechas en virtud de lo prevenido en la citada Real orden.

Al comunicar á V. S. esta disposición, debo además encargarle que si alguno ó algunos representantes de las Corporaciones ó establecimientos de que se trata, descuidase

el presentarse á percibir las sumas á que tuvieran derecho, cuide V. S. de invitarles á que lo verifiquen á fin de qués por demora ó negligencia no sufra el menor retraso tan importante servicio.

*Lo que se inserta para conocimiento de las Corporaciones á quienes hace referencia, excitándolas á que procuren acelerar las respectivas liquidaciones, nombrando personas convenientemente autorizadas que las intervengan, si ellas mismas no pudieren verificarlo. Orense 1.<sup>o</sup> de marzo de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guilián.*

Número 137.

*El Ilmo. Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio me dice en 31 de enero último lo que sigue:*

«Pasada á informe del Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio la comunicación que dirigió V. S. á este Ministerio en 50 de marzo último, dicha corporación con fecha 2 de diciembre ha emitido el siguiente dictámen:

La Comisión que ha examinado el oficio del Gobernador de Orense acerca de las medidas que ha adoptado para ver de disminuir los males causados en los viñedos de aquella provincia por el Oidium Tuckeri, no puede menos de aplaudir el celo de este funcionario público en el desempeño de su cargo como lo acredita el Boletín oficial que acompaña del dia 30 de marzo de este año.

No está la Comisión enteramente conforme con las opiniones emitidas por D. Pablo González Rivera y Huertas, aunque encuentra en ella noticias importantes sobre la historia de la marcha que ha seguido la enfermedad en aquella provincia y algunos de los métodos adoptados para combatirla.

Y como el expresado Gobernador pide con grande ingenuidad las

observaciones que se estimen convenientes, ó las noticias que puedan contribuir á resolver con mejor acierto, podría decirse que sobre no estar probada la eficacia del sulfuro de arsénico contra la enfermedad en cuestión, es sumamente espuesta para la salud de los operarios la quema que se aconseja de la media onza de sulfuro de arsénico (sea rojo ó amarillo), de media onza de azufre y una onza de antimónio crudo, aun cuando se adopten las precauciones de cubrirse la respiración con un paño empapado en agua de vegeto.

Será muy preferible recomendar la aspersión de la flor de azufre sobre las cepas acometidas, al tiempo de brotar, durante su florescencia y al pintar la uva, valiéndose al intento del bote conocido con el nombre *Boite à houppé* de los señores Juin, Franc y Compañía como el mejor y más barato de los inventados hasta el día.

Y habiéndose conformado esta Dirección con el preinserto dictámen, lo traslado á V. S. para los efectos consiguientes.»

*Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense marzo 1.<sup>o</sup> de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guilián.*

Número 138.

*En la Gaceta de Madrid número 32 del martes 1.<sup>o</sup> del actual se publica lo siguiente:*

MÍNISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.

*Administración.—Negociado 6.<sup>o</sup>*

Remitido á informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Villena, para procesar al Regidor del Ayuntamiento de aquella ciudad D. Antonio Perpiñán, por las palabras injuriosas dichas á la Corporación municipal, han consultado lo siguiente:

«Las Secciones han examinado el expediente en que el Juez de primera instancia de Villena pide autorización para

procesar á D. Antonio Perpiñán, Regidor del Ayuntamiento de dicha ciudad:

Resulta de los antecedentes que en sesión celebrada por la Municipalidad en 30 de abril de 1857 el Alcalde manifestó que, teniendo que ausentarse, debía suplirle en la Alcaldía el primer Teniente-Alcalde D. Pascual García Flores, en cuyo caso creía que no podía seguir desempeñando la Alcaldía de Aguas que desempeñaba; que acalorándose con este motivo la discusión, el Regidor Perpiñán dijo: que en el Ayuntamiento se cometían infamias contra cuyas palabras reclamaron el Presidente y algunos Concejales, mandándole á aquel se saliese de la sala para evitar mayor desorden, á lo que contestó Perpiñán que no saldría si no le hacían pedazos:

Que el Alcalde dispuso se consignasen estas palabras en el acta y se le diese certificación de ello, en cuyo acto Perpiñán manifestó que la expresión de que en el Ayuntamiento se cometían infamias, era porque desde que se instaló el Ayuntamiento, siendo su Presidente el Marqués de Colomer, se habían invertido seis horas en una cuestión sobre si se separaría ó no á un portero y otros hechos análogos, y que había querido decir únicamente que lo que sucedía era por dos personas tan insignificantes como un portero y un regidor, sin querer ofender á nadie:

Que el Alcalde denunció el hecho al Juez del partido para que procediese á lo que hubiese lugar; examinados algunos testigos acerca del particular y pasadas las actuaciones al Promotor fiscal, éste propuso que estando justificado que Don Antonio Perpiñán ha cometido un delito penado por el Código penal, debía dirigirse contra el procedimiento de oficio, imputando del Gobernador la autorización por pertenecer Perpiñán á una Corporación dependiente de su autoridad y haber delinquido en acto de su cargo.

Pidióse en efecto la autorización, que fué denegada, visto el Consejo provincial, fundándose en que las sesiones de Ayuntamiento son secretas y no puede suponerse que las palabras proferidas por Perpiñán tuviesen por objeto desacreditar, deshonrar á nadie, puesto que no tuvieron publicidad; y que aun cuando había proferido la palabra infamias, lo había hecho en el calor de la discusión y sin querer ofender á nadie, según las explicaciones que después dió:

Visto el Real decreto de 27 de marzo de 1850, en que se dictan reglas para procesar á los Gobernadores, Corporaciones y Autoridades dependientes de su autoridad por delitos cometidos en el ejercicio de sus atribuciones;

Visto el art. 65 de la ley de Ayuntamientos vigente, según el cual los Ayuntamientos celebrarán a puerta cerrada sus sesiones, excepto aquellas en que traten de los altatamientos y sorteos para el servicio militar:

Considerando por una parte que siendo secretas las sesiones de Ayuntamientos, las palabras pronunciadas por el Regidor Perpiñán no pueden considerarse como injurias, y por otra, aun cuando hubiese habido excesos por su parte, sería de tal naturaleza que su corrección y sanción correspondería al Gobernador de la provincia;

Opinan puede V. Ex consultar á S. M. se conforme la negativa.

Y hbiéndose dignado S. M. la Reina (que Dios guarde) resolver de conformidad con lo consultado por dichas Secciones, de Real orden lo comunicó a V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 7 de enero de 1859.—Posada Herrera.—Señor Gobernador de la provincia de Alicante:

Remitido á informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado del expediente de autorización negada por V. S. al Juez de Hacienda de esa capital para procesar al Alcalde de Mo., D. José Novo, por haber autorizado verbalmente al pedáneo de la parroquia de San Martín de Tameiga, D. Manuel Antonio Taboas, para la publicación del repartimiento de la contribución de consumos, sin las formalidades legales, han consultado lo siguiente:

Estas Secciones han examinado el expediente original remitido por el Gobernador de la provincia de Pontevedra, en que ha negado al Juez de Hacienda de la misma la autorización para procesar al Alcalde del Ayuntamiento de Mo., Don José Novo, concediendo al propio tiempo la solicitada respecto al pedáneo de la parroquia de San Martín de Tameiga, D. Manuel Antonio Taboas; de cuyo expediente resulta:

Que a consecuencia de un parte de la Guardia civil y de denuncia luego presentada por tres vecinos de la expresada parroquia, se procedió á la formación de causa, en que resultó que el indicado pedáneo publicó el repartimiento para la contribución de consumos sin la competente autorización, contra la forma establecida por la ley y recaudando de igual modo contribuyentes el importe de este repartimiento.

Que, asimismo apareció que la publicación del repartimiento se había hecho por el pedáneo con autorización verbal del Alcalde de Mo., si bien esta autorización no se extendió a la cobranza, y se concedió bajo ciertas reglas y conforme á la costumbre, previniendo al pedáneo que hecho el repartimiento iba a asistencia de cuatro mayores contribuyentes, si se presentaban agujeros al mismo repartimiento advirtiése a los interesados que facudiesen al Ayuntamiento para repararlos;

Que el Juez de Hacienda, conforme con el Promotor fiscal, solicitó del Gobernador de la provincia el correspondiente permiso para procesar al Alcalde y pedáneo cesados, y pasado el negocio a consulta del Consejo provincial, nel Gobernador, de acuerdo con su dictamen, concedió, desdijo luego la autorización que sus solicitudes respecto al pedáneo y la denegó en cuanto al Alcalde, aplazándolo hasta tanto que no aparezcan graves los hechos que hasta ahora se encuentran desnudos de criminalidad en este funcionario.

Visto el art. 119 del Real decreto de 23 de mayo de 1843 para el establecimiento del derecho sobre consumo de especies determinadas, segn el cuál interdicta que el repartimiento sea presentado por los repartidores al Ayuntamiento, disponrá este que se anuncie al público, señalando el sitio, y dia en que

los contribuyentes podrán reconocerlo y hacer sus reclamaciones, las cuales serán admitidas durante el plazo de veinte quince días, que el repartimiento ha de estar expuesto al público; y durante el mismo plazo el Ayuntamiento resolverá, con audiencia de los repartidores, todas las reclamaciones presentadas.

Considerando:

1º Que de hecho que hasta ahora aparece contra el Alcalde de Mo. es cuando mas una infracción, en cuanto de la disposición preinserta, que no consta fundada por la costumbre, sin que la autorización verbal que concedió al pedáneo sea extensiva á la cobranza del impuesto, ni revele de modo alguno menor intento criminal.

2º Que pudiendo ser corregida gubernativamente esta infracción, ha estado en su lugar la negativa del Gobernador para el procedimiento respecto al Alcalde.

Las Secciones opinan que podría V. Ex manifestar á S. M. que procede confirmar la negativa del Gobernador de Pontevedra; y que respecto a la autorización concedida para procesar al pedáneo de San Martín de Tameiga, estas Secciones quedan enteradas.

Y hbiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por las referidas Secciones, de Real orden lo comunicó a V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 14 de enero de 1859.—Posada Herrera.—Señor Gobernador de la provincia de Pontevedra:

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público, Orense 28 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guittan.

Número 139.

En la Gaceta de Madrid número 42 del viernes 11 de febrero se lee lo siguiente:

#### MINISTERIO DE FOMENTO.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público, Obras públicas.

Hmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) accediendo á lo solicitado por D. José Villarrubia y hermanos, que ha servido autorizaciones, paga que por término de 12 meses y con sujeción á lo prevenido en el artículo 8º de la Instrucción de 10 de octubre de 1845, practiquen los estudios necesarios para la mejora del pueblo de la Coruña, quedándose que esta autorización no les da derecho á que se les otorgue la concesión definitiva de dicha obra, si no se juzga conveniente, ni a reclamar indemnización de ningún género por los trabajos que practiquen.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de febrero de 1859.—Corvera.—Sr. Director general de Obras públicas.

#### SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 5 de febrero de 1859, en el pleito seguido por Juan Fermín Goldaraz, como curador de José María Ezcurra, con Martín Francisco Eleano, sobre extinción del usufructo de la casa y bienes de Juantorena, pendiente ante Nos por recurso de casación que interpuso el primero contábil la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Real Audiencia de Pamplona:

Resultando que en 5 de marzo de 1838 contrajeron matrimonio Martín Francisco Eleano y Polonia Ezcurra, aportando ésta como heredera de su difunto padre la casa denominada de Anchoricena de Buratain con todos los bienes y derechos pertenecientes á la misma;

Resultando que por la clausula 7º de los capitulaciones matrimoniales que otorgó

garón se estipuló que si la Polonia Eleano sin hijos, o aunque los tuviese y murieran estos sin sucesión, habían de recesar dicha casa y bienes en su hermano Gabriel Ezcurra, y por muerte de este en el parente troncal más cercano de grado provoquieren; facultando para la ejecución entre los de igual derecho ó grado, ó los más parentes más cercanos, y a un tercio para el caso de discordia entre estos; en este caso, que si el dispositivo a Martín Francisco Eleano quisiera dejar el usufructo viatico de la referida casa y bienes fuese de ella por ensuiciendo ó en otra forma, tuviese derecho de herzar todos los bienes donados al hermano, conjuntamente con los demás derechos que en ellos adquiriera:

Resultando que por la cláusula 9º se estipuló que si cualquiera de los desposeídos falleciese dejando hija ó hijos del matrimonio ó podría el supérstite repetirlo ó más matrimonios, sin perder por ello el indicado usufructo:

Resultando que la Polonia Ezcurra falleció en 28 de julio de 1840, dejando de su matrimonio una hija que vivió hasta 4 de setiembre de 1855:

Resultando que en el tiempo que medió entre la muerte de la madre y la de la hija, pasó á segundas nupcias el padre y sucesivo Martín Eleano, adquiriendo este en favor de su hija, con intervención de su tutor y autorización judicial, la casa titulada de Juantorena y sus pertenencias, con el producto de la de Anchoricena y las suyas;

Resultando que en 1º de diciembre de 1855 Juan Fermín y Juan Miguel Goldaraz, como parentes más cercanos por línea paterna de José María Ezcurra, menor é hijo único de Gabriel y hermano también único de la difunta Polonia, comparecieron ante un Escrivano y testigos, y nombraron, en cumplimiento de la cláusula 7º de las referidas capitulaciones, heredero de la casa y bienes de Anchoricena, hoy de Juantorena, y de la herencia de la Polonia Ezcurra, su sobrino José María, para que desde luego entrase a disfrutar de los repetidos bienes:

Resultando que en virtud de este nombramiento acudió en 26 del mismo mes al Juzgado de primera instancia de Pamplona Juan Fermín Goldaraz, como curador del menor José María Ezcurra, pidiendo se declarase extinguido el usufructo de la casa de Juantorena y demás bienes a ella correspondientes, que estaba disfrutando Martín Eleano, condenando a este á sufrir la ejecución con los productos de la muerte de su hija, alegando para esto: primero, lo expresamente estipulado en la cláusula 7º de las capitulaciones matrimoniales, que no podría contradecirse con el hecho de haber muerto con sucesión la Polonia Ezcurra, porque la cláusula 9º debía entenderse para el caso y mientras viviese el hijo ó hijos del matrimonio; y segundo, porque habiendo faltado Eleano á lo dispuesto por las leyes 1º y 2º tit. 14 de la Novísima Recopilación, dejando de inventariar los bienes al entrar en el usufructo, había perdido este.

Resultando que el demandado pidió se declarase no haber lugar á la demanda, ó cuando no, que se le absolviera de ella, y por suista reconvencion solicitó se mandase al curador del menor José María Ezcurra que él, a cuenta y liquidación de las deudas anteriores a su matrimonio, a que eran responsables los bienes de su difunta mujer, que había satisfecho, fundándose para lo primero en lo estipulado en la cláusula 9º y en las disposiciones de las leyes 5º y 6º de Navarra;

Resultando que el Juez de primera instancia pronunció su sentencia estimando la demanda del curador de José María Ezcurra, y que habiendo omitido resolver sobre la suista reconvencion, dictó auto a instigación del demandado, ordenando la liquidación pudiendo por este;

Resultando que sustentada la apelación que contra dicha sentencia interpuso el demandado, la Sala Segunda de la Real

Audiencia de Pamplona pronunció la de 21 de noviembre de 1857, por la que, revocando la del inferior, declaró que Martín Francisco Eleano no había perdido el usufructo de la casa y tierras de Anchoricena, sustituidos en el dia con aprobación judicial en los de Juantorena, absolvéndole en su consecuencia de la demanda del curador de José María Ezcurra y constituyéndole auto preceptivo de la liquidación de cuentas solicitado por Eleano;

Y resultando, por su timo, que este intentó recurso de casación, por conceputar, infringida por dicha sentencia la ley 49 de las Cortes de Navarra de 1765 y 1766; añadiendo en este Supremo Tribunal, con arreglo al art. 109 de la ley de Ejecución civil, las que rigen en materia de contratos, y el axioma de derecho de que cualquiera puede renunciar los beneficios que le conceden las leyes:

Aristo; siendo Ponente el Ministro Don Fernando Calderon Collantes:

Considerando que por la falta de formacion de inventario solo se pierde en Navarra el usufructo foral, mas no el vitalicio, ó convencional, cuyo es el constituido en las referidas capitulaciones matrimoniales á favor de Eleano; por lo qual no se ha infringido la ley citada 49 de las Cortes de Navarra de 1765 y 1766;

Considerando que Eleano no renunció en las capitulaciones ya indicadas, ni pura ni condicionalmente, el usufructo legal que le correspondía en los bienes de su esposa si la sobreviviese, por lo qual tampoco se ha infringido el axioma legal de que, cualquiera puede renunciar los beneficios que le conceden las leyes, ni otra alguna de las que tratan de contratos;

Fallamos que debemos declarar y declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el curador de José María Ezcurra, á quien condenamos en las costas, que pagara cuando llegue á mejor fortuna.

Así por esta nuestra sentencia, de la cual se pasarán copias certificadas para su publicacion en la Gaceta y Colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan Martín Cartamolino—Sebastián González Nandín.—Vicente Vitor.—Jorge Gijerol.—Miguel Osca.—Antero de Echarri.—Fernando Calderon y Collantes.

Publicación.—Leída y publicada, fué la precedente sentencia por el Ilustísimo Señor Don Fernando Calderon y Collantes, Ministro de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la misma, de que certifico como Secretario de S. M. y su Escrivano de Cámara en dicho Supremo Tribunal.

Madrid 5 de febrero de 1859.—José Calatayud.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público, Orense 18 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guittan.

Número 140.

En la Gaceta de Madrid núm. 56 del viernes 25 de febrero último se lee lo siguiente:

#### MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Administración.—Negociado 6º.

Remitido á informe de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado el expediente sobre autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Verín, para presentar á don Antonio Pousada, Alcalde pedáneo de Vilela, han consultado lo siguiente:

Las Secciones han examinado el expediente en que el Juez de primera instancia de Verín pide autorización para procesar á Antonio Pousada, Alcalde pedáneo de Vilela.

Resulta, que en 21 de julio de 1858, don José Canill, vecino de Verin, presentó un escrito de denuncia al Juez, manifestando que en el sitio llamado de Amieiral, barrio de la Pousa de Monterrey, posee una finca "mitad labrantía y mitad para lo todo ella cercada, que poseyeron sus padres por más de 20 años, heredando de ellos el expuesto, sin haber sido jamás inquietados que sin haber sido demandado al juzgado en juicio, y si invalida su propiedad por varias personas, introduciéndose en ella, derrubando el muro y aprovechándose de sus producciones, llevándose en carros las zarzas, tojos y arbustos que tenía junto a la pared, para su mayor conservación; pidió que justificando los hechos se procediese a la prisión de los culpables, en cargandoles sus bienes.

Declararon 11 testigos, conforme a la denuncia, confirmando los hechos en ella contenidos.

Tomáronse las indagatorias á los presuntos reos, y todos dijeron que habían obrado por orden del pedáneo Antonio Pousada. Este en su declaración dijo que después de un largo plazo, que duró tres años en definitiva, fue declarado communal de Vilcela el sitio donde se hallaba la finca de don José Canill y otras; y en su consecuencia, con orden del Ayuntamiento fue á la cabeza de varios vecinos y arrancaron el vallado con que estaba cercada dicha finca, introduciendo en seguida sus ganados, los cuales comieron la yerba y pasto; y las zarzas, helechos y demás que contenía la vendió con acuerdo del Ayuntamiento por 9 rs., entrando en la venta de los otros vallados de las fincas contiguas; que antes de todo, el Ayuntamiento ofició al Alcalde de Monterrey para que hiciera saber á los poseedores de fincas en términos de Vilcela, que habían sido declaradas comunales, desocupasen los sembrados en término de ochenta días; pero no habiéndose realizado, recibió orden del Ayuntamiento para proceder al allanamiento de que queda hecho mérito.

Practicóse por peritos reconocimiento y justiprecio de los daños ocasionados, y se previno al pedáneo presentase la orden que decía le había comunicado el Ayuntamiento.

Según el testimonio de esta, que aparece en autos, el Alcalde de Verin, en 50 de junio de 1857 proximo al pedáneo Pousada que habiendo transcurrido el término señalado por el Ayuntamiento á los terrenos acotados en el communal de Vilcela, dispusiera se cumplimentase este acuerdo respecto á los que estuviesen situado, reservando éstos hasta su recogida, pasada la cual procediera á lo mismo.

Púsose testimonio, además, á petición de la parte actora, de un oficio del Gobernador de la provincia, su fecha 14 de mayo del mismo año, deslindando los términos de los pueblos de la Pousa, Monterrey y Vilcela, poniéndolo en conocimiento del Alcalde de Verin, y comisionando al Juez del partido para que practicase la operación; de un acuerdo del Ayuntamiento, á consecuencia de una información practicada, á instancia del pedáneo de Vilcela para que se oficiase al Ayuntamiento de Monterrey, á fin de que hiciese saber á los vecinos de aquél Ayuntamiento, que tuviesen acotados los terrenos llamados comunales en el término de Vilcela, los dejase en completo baldío luego que recogiesen los frutos, dando ochenta días de término á los dejos, haciéndole saber esto mismo al pedáneo de Vilcela. Los Ayuntamientos de Monterrey y la Pousa protestaron contra este acuerdo.

Pasada la causa al Promotor fiscal, opinó que no podía procederse contra el pedáneo Pousada, porque había quitado en cumplimiento de lo dispuesto por la Corporación municipal. El querellante, sin embargo, formalizó su acusación; y el Juez por auto de 10 de abril de 1858

confirió traslado á los procesados, nombrando Procurador y Abogado, á no ser que se conformasen con la pena pedida. El Promotor, con nueva vista de la causa, dijo que no podía procederse contra el pedáneo sin la previa autorización del Gobernador, y por auto de 12 de mayo se solicitó la autorización, diligencia que, según el Juez, se había omitido por un olvido involuntario.

El Gobernador, de conformidad con lo expuesto por el Consejo provincial, denegó la autorización:

Visto el art. 88 de la ley de Ayuntamientos de 8 de enero de 1843, según el cual los Alcaldes pedáneos, como delegados del Alcalde, ejercerán las funciones que éste les señale con arreglo á los reglamentos y disposiciones de la Autoridad superior:

Visto el art. 8º, num. 12 del Código penal, que exime de responsabilidad criminal al que obra en virtud de obediencia debida;

Considerando que al allanar el pedáneo de Vilcela la finca de don José Canill, quitando la cerca que tenía y haciendo entrar en ella personas y ganados, no hizo sino cumplir con una orden del Alcalde de Verin, cuyas disposiciones estaba obligado á obedecer;

Considerando que al quitar las zarzas, tojos y arbustos que había cerca de la pared de la cerca lo hizo en el concepto de que, siendo el terreno de aprovechamiento común, lo eran las producciones naturales del mismo, como los postos que aprovecharon los ganados;

Opinan puede servirse V. E. confirmar la negativa dada por el Gobernador, y lo acordado en el Oficio de 14 de mayo de 1857. Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por dichas Secciones, de Real orden lo digo á V. S. para su inteligencias y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 20 de febrero de 1859.—Posada Herrera.

—Sr. Gobernador de la provincia de Orense.—Alto de la Junta Provincial de Instrucción Pública de Orense, 28 de febrero de 1859.—El Gobernador, Hermenegildo Guitian.

#### Junta provincial de Instrucción pública de Orense.

Sin embargo de haber transcurrido con notable exceso el término presijido por esta Corporación en su circular inserta en el Boletín número 12, para que los Sres. Alcaldes renudiesen una lista nominal de los maestros y maestras que regentan escuelas públicas en sus respectivos distritos, los de los Ayuntamientos que á continuación se expresan no han cumplido con aquel deber. Se les previene pues lo verifiquen con expresión de la que está á cargo de cada uno al término de tercer dia.

Orense, 27 de febrero de 1859.—El Gobernador Presidente, Hermenegildo Guitian.

Abion.	Maside.
Baños de Molgas.	Moreiras.
Bárco.	Manzaneda.
Buberás.	Montederramo.
Bola.	Mezquita.
Blancos.	Nog. de Ramuin.
Beade.	Paderne.
Bollo.	Padrenda.
Cartelle.	Petín.
Calbos de Ran-	Porquera.
din.	Per. de Aguiar.

Castro de Miño.	Parada del Sil.
Cenlle.	Quintela de Leirado.
Castro Caldelas.	Rio.
Castro de Valle.	Riós.
Cualedro.	Ruiz de Veiga.
Esgos.	Sandianes.
Entrimo.	Sarreans.
Freás de Eiras.	Taboadela.
Gudiña.	Teixeira.
Chandreja.	Verin.
Junq. de España-	Villamartín.
daneiro.	Villanueva de los
Loveta.	Infantes.
Laroco.	Villar de Santos.
Maceda.	Villar. de Conso
Muiños.	

condiciones y de los requisitos y término del remate. Parada del Sil, 27 de febrero de 1859.—El Alcalde presidente, José Rodríguez.—P. A. D. A., Manuel María Castroceiros, secretario.

#### Juzgado especial de Hacienda de Orense.

Don Valentín de Noya, abogado de los tribunales nacionales del Reino y escribano por S. M. de Hacienda de la provincia de Orense.—Certifico: que en el expediente de tercera de dominio á instancia de Tomasa González, de Mesiego, partido del Carballino, contra Carlos Rodríguez su marido y Promotor fiscal de Hacienda, sobre reintegro de su capital aportado al concurso, se dió y pronunció en 3 de diciembre del año último la sentencia que á la letra dice así:

En el expediente de tercera de dominio pendiente en este Juzgado entre partes, de la una Tomasa González, de Santa María de Mesiego, partido del Carballino, Carralba su procurador y de la otra el Promotor fiscal de Hacienda y Carlos Rodríguez sobre reclamación de diez y nueve partidas de bienes que la Tomasa González dice son de su pertenencia aportados al matrimonio con Carlos Rodríguez.

Vistos:

Resultando que en 2 de diciembre último Tomasa González prolijo demanda de tercera de dominio sobre las indicadas partidas, alegando haberlas heredado de sus padres Antonio González y Teresa de Castro, y aportado como dote y capital suyo al matrimonio referido;

Resultando que seguido el expediente por sus trámites y recibido á prueba á solicitud de la parte demandante han declarado sus convivios Manuel de Castro, Esteban González y Benito Fernández á tenor del interrogatorio producido por aquella, asegurando constarles que los bienes en cuestión proceden de herencia y fueron aportados al matrimonio por la repetida Tomasa González;

Considerando que esta no ha presentado testamento, testimonio de hijuela, escritura matrimonial, certificación de la Contaduría de hipotecas ni otro documento alguno que acredite los fundamentos de su demanda;

Considerando que á la prueba testifical aislada, supletoria en materia civil, no puede darsele valor alguno en el presente caso puesto que no es posible que si realmente hubiese heredado y aportado los bienes que reclama al matrimonio careciese de alguno de los documentos preindicados; Fallo: que deba declarar y declaró que Tomasa González no ha probado como probar debía su acción y demanda de tercera, y mando que continúen los procedimientos ejecutivos contra los bienes embargados que memorializó aquella, pertenecientes legalmente a su marido Carlos Rodríguez como jefe de la familia hasta hacer pago de la multa y todas las costas causadas tanto en la causa sobre delito de contrabando en que incurrió el Rodríguez y que dió margen al embargo como en este incidente. Así por esta sentencia que se notificará á las partes definitivamente juzgando lo pronunció, mando y firmo.—Rafael Blanco Alcalde.

Dada y pronunciada fué la sentencia que antecede por el Sr. D. Rafael Blanco Alcalde, Juez especial de Hacienda de la ciudad y provincia de Orense estando en audiencia de 3 de diciembre de 1858, siendo testigos D. José Quiroga, D. Ramón Abellás y D. Antonio Blanco, de esta ciudad, y yo escribano doy fe.—Ramon Abellás.—José María Quiroga.—Antonio Rodríguez, se acordó en provecho de este dia y en cumplimiento de la que prescribe el art. 1, 19º, remitir copia testimonizada de la sentencia preinscrita al Sr. Gobernador civil para que se sirva disponer su inserción en el Boletín oficial de la provincia. Y en cumplimiento de lo mandado

libro el presente que firmo en este pliego entero del sello de oficio en Orense á 23 de febrero de 1859.—Valentín de Núñez.

#### Juzgado de primera instancia de Orense.

Don Julian de Castro y Rodriguez, escribano de número del juzgado de primera instancia de esta ciudad.—Certifico que en este juzgado y por mi oficio se sustanció demanda de tercera promovida por Manuela Gomez contra los acreedores a la herencia de su marido Benito Puente, en la que recaió la sentencia siguiente: En la ciudad de Orense á 14 de Febrero de 1859.—El Sr. D. Facundo Santos Cid, secretario honorario de S. M., juez de primera instancia de esta capital y su partido, habiendo visto esta demanda tercera de dominio y también mejor derecho a los bienes concursados a Benito Puente de Piñor, entablada a instancia de su mujer Manuela Gomez en reclamación de los bienes aportados al matrimonio y adquiridos de sus tíos D. José Lloves y Doña Teresa Rodriguez, a fin de que se la entreguen los embargados y concursados que son de su pertenencia, y en los otros se la dé preferencia sobre los demás acreedores y asimismo en los malversados por su marido el Benito, en cuya demanda se encuentran en rebeldía los síndicos del concurso D. Baltasar Valdés y D. Pedro Cid contra quienes se ha entendido:

Resultando que Manuela Gomez se presentó en juicio en 26 de julio de 1856, haciendo dicha reclamación pidiendo información de pobreza y que se la defendiera en este concepto mientras se ventilara, presentando la escritura de donación de Don José Lloves y su esposa Doña Teresa Rodriguez; que se suspendan los procedimientos ejecutivos contra los bienes de su dicho marido, y que se entienda con el Promotor fiscal por la ausencia de este a cuya pretensión se providenció que se esperase á que recaiga ejecutoria en la demanda de pobreza de la Manuela, que sin este perjuicio se librara despacho para notificar á Severo Lloves y para que se tenga presente la tercera interpuesta se arreglen á lo preventivo en los artículos de la ley de Enjuiciamiento civil.

Resultando fijo 16 vuelto, que en 12 de agosto, el Procurador Pedrayo por D. Baltasar Valdés y D. Severo Lloves, manifestó que le era indiferente el que la Manuela se defendiese ó no por pobre, y en su consecuencia se mandaron pasar los antecedentes a la Escrivania de D. Fernando Cerviño para que diese cuenta con los de ejecución a instancia del Lloves:

Resultando que dado cuenta de estos antecedentes y los autos ejecutivos contra Benito Puente y su mujer Manuela Gomez por la cantidad de 1,640 rs., se mandó que entiesen unidos en cuerda floja con los de D. Baltasar Valdés ejecutante también contra el Benito Puente por 1,200 reales;

Resultando que declarada pobre con audiencia del fiscal, se comunicó traslado al Procurador Pedrayo, quien en nombre del D. Baltasar y D. Severo, le evacuó impugnando la tercera y pidiendo que siguiese la ejecución adelante:

Resultando que dicho expediente siguió sus trámites y que se mandó formar pieza separada, que se entendiese con los síndicos D. Baltasar Valdés de esta ciudad y D. Pedro Cid de la Valenzana, y pidiendo la Manuela por su Procurador D. Ramon Francisco Armada que se recibiese el pleito a prueba entendiéndose las diligencias con dichos síndicos:

Resultando que habiéndose estimado la citación y emplazamiento á los dichos, tuvo efecto en 21 y 31 de agosto del año último:

Resultando que en 10 de setiembre se los acusó la rebeldía por Armada, lo que se hubo por acusada declarándoseles por decaídos del derecho que tenían á contestar por haber pasado el término sin verificarse, cuya providencia se les hizo saber en la forma preventiva por la ley:

Resultando que recibido el expediente á prueba folio 31, el Procurador Armada por su parte ofreció la testifical presentando interrogatorio de seis preguntas reducidas á probar la donación del D. José Lloves y su mujer á favor de la Manuela las fluces que la pertenecen de las embargadas los muebles, el dinero y las descalzadas por su marido y ella durante el matrimonio, presentando diez testigos que fueron examinados por las preguntas que á cada cual hacia relación, terminando el expediente en rebeldía completa de los síndicos con el alegato de conclusión del Procurador Armada, en el que con vista de las pruebas concluyó para definitiva, solicitando se declarasen á favor de su parte bienes dotales, las diez y siete partidas que expresa la segunda pregunta útil del interrogatorio y también las engañadas de la cuarta y quinta, concluyendo porque se excluyesen del embargo las primeras y que se la entreguen con los frutos que debieron producir desde el secuestro y que con los bienes concursados se la haga pago de los 2,200 rs. que recibió su marido Benito por la herencia paterna y materna, y de los 2,288 en que fueron apreciados por el Perito Villarino las cinco partidas de bienes dotales engañadas durante matrimonio con las costas:

Vistos: Considerando que la Manuela Gomez ha justificado en bastante forma y con las declaraciones de los testigos primero al quinto inclusive, que las nueve partidas de bienes que reclama y expresa la tercera pregunta corresponden a la Manuela Gomez por procedencia de sus tíos D. José Lloves y Doña Teresa Rodriguez que se las donaron según consta de la escritura. Compulsada como asimismo que las partidas de bienes muebles también la corresponden por el mismo concepto:

Considerando que los testigos sexto y séptimo están conformes con la entrega de los 2,200 rs. a la Manuela Gomez y su marido Benito por herencia paterna y materna y los nueve y diez que vendieron varias fincas el Benito y su conjunta para el pago de funerales y mandas piadosas de los D. José Lloves y Doña Teresa Rodriguez, S. S. por antem. Escribano dijo: que la parte del Procurador Armada había probado bien y cumplidamente su acción y demanda y que no habiéndose opuesto y ni aun presentándose en juicio los síndicos Don Baltasar Valdés y D. Pedro Cid, permaneciendo en rebeldía todo el expediente, debía declarar y declaraba bienes de la pertenencia de Manuela Gomez los comprendidos en las diez y siete partidas del Memorial ó relación presentada; y que en su consecuencia se alce respecto á ellos el embargo y retención en que se encuentran, poniéndolas á su disposición:

Por lo que hace á los 2,00 rs. de las

herencias paterna y materna; y 1,288 de las cinco partidas que resultan vendidas durante matrimonio que también reclama;

téngasela por parte en el concurso, designándola para su cobranza el lugar que

por derecho la corresponda, y lo que verificaran los síndicos, protegiéndola al efecto de los testimonios que pidiere, y visto el artículo 1,190 de la ley de Enjuiciamiento civil:

Resultando que este juicio se ha seguido en rebeldía de los síndicos del concurso, además de notificarse esta providencia en los estrados del juzgado, hagase notorio por medio de edictos en la forma preventiva en el art. 1,183, y publique en el Boletín oficial de esta provincia, pasando testimonio de la misma con atento oficio al Sr. Gobernador de ella para que tenga efecto. Así por esta mi sentencia sin hacer especial condenación de costas, lo mandó y firmó S. S. de que yo Escribano doy fe.—Facundo Santos Cid.—Antem. Julian de Castro.—Y para que conste en cumplimiento de lo mandado, firmo la presente en estos dos pliegos del sello de pobres, estando en Orense á 23 de febrero de 1859.—Julian de Castro.

#### Idem de Lalin.

El Sr. D. Juan Vidal, Juez de primera instancia del partido y villa de Lalin &c. —Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan Asorey, vecino de la parroquia de San Pedro de Cumeiro, en el distrito de Carbria, para que se presente dentro del término de treinta días á responder á los cargos que contra el mismo resultan en causa criminal que estoy instruyendo en averiguación de los causales que produjeron la muerte de Francisca Gil, de la propia vecindad; bajo apercibimiento que de no verificarse le parará el perjuicio que haya lugar. Asimismo encargo á todas las autoridades civiles y militares la captura del sobredicho, cuyas señas á continuación se expresarán y lo remitirán con seguridad á disposición de este Juzgado.

Dado en la villa de Lalin á 19 de febrero de 1859.—Juan Vidal.—Por su mandado, Domingo Antonio Gutierrez.

#### Señas personales.

Estatuta 5 pies escasos, edad 44 años, cara larga con poca barba y sin patillas, ojos pardos, nariz abultada y larga; viste calzon y chaqueta de lana del país, cubría una gorra también de lana algo usada y calzaba zuecos y todo ello lo anoto yo escribano originario de la causa de que ya hecho mérito.

#### Idem de la Coruña.

Don Vicente Gutierrez Piñeiro, Juez de primera instancia de esta ciudad de la Coruña y su partido.—Por fallecimiento de Caisto Rodriguez y Martinez, hijo de Mariano y Manuela, vecinos de Peñafiel de Duero, soltero, zagal que fué del omnibus que transitó desde Betanzos á esta capital y viceversa, se procedió al inventario de sus bienes consistentes en un reloj de plata para bolsillo y varias prendas de ropa de escaso valor recogidas en esta ciudad, Lugo y Leon; y por haber renunciado sus padres la herencia contra la que se presentaron algunos acreedores, acordó por auto de 14 del corriente llamar por edictos y término de treinta días á todos los que se crean con derecho á aquella; advertidos que de no deducirlo dentro de aquel periodo por la escribanía del autorizado se continuará el juicio de abiertostato y causará estado. Dado en la Coruña á 19 de febrero de 1859.—Vicente Gutierrez Piñeiro.—Por mandado de dicho Señor, José Ramon Pulleiro.

#### Juzgado de paz de Caso.

En este juzgado de paz del concejo de Caso, provincia de Oviedo y por ante el infrascrito secretario, se está entendiendo en las diligencias de prevención de abierto fallecimiento de un tendero de quince años ambientante llamado Andres Gonzalez (a) el Gallego, natural que dicen ser de Santa María de Villardá en la provincia de Orense, á donde se han remitido ya repetidos exhortos, sin causar efecto alguno.

En su consecuencia se acordó en 5 del actual la inserción del anuncio en el Boletín oficial de dicha provincia para que llegue á noticia de sus herederos si los tuviesen; con apercibimiento de que si dentro de veinte días á contar del en que se inserte en dicho Boletín no se presenta persona legalmente autorizada para encargarse de su herencia intervienda y pagar sus deudas ó renunciarla, se procederá á la venta de los géreros y pago de las que resulten en concurso de acreedores y previas las formalidades de la ley de enjuiciamiento civil. Así lo acordó el señor don José Gao Quintana, juez de paz, de que yo el secretario en comisión certifico hoy 9 de febrero de 1859.—José Gao Quintana.—Francisco Quintana.

#### PIRETOLOGÍA FILOSÓFICA,

ó sea aplicación de la Filosofía clínica al estudio de las Fiebres y de las Calenturas.

Años hace que reconozco la necesidad clínica de un tratado especial sobre las fiebres; y años hace también que lo hubiera publicado sin dos obstáculos poderosos que me lo impidieron. El primero fué vencer mi indecisión y el deseo de que solo pase como el resultado de un maduro examen. Siento haber sido excesivamente tímido, porque hace diez años mis principios sobre esta parte importanísima de la ciencia hubieran presentado mayor novedad, sin que por esto dejen aun de tener originalidad ó ideas nuevas que, simplificando los estudios piretológicos, dan fijza á las ideas y á los principios sobre enfermedades tan comunes, pero que no obstante continúan siendo motivo de acaloradas discusiones. Creo que mi nueva doctrina sobre las calenturas, las fiebres y los typhus se leerá con interés por sus ideas, por su claridad y por su sencillez, y porque pondrán al joven práctico en una posición ventajosa para ver con seguridad y convencimiento, sin esa vacilación en los planes que los sistemas producen.

Tiene además mi obra el objeto de habituar á la verdadera observación, utilizando en el verdadero campo de la práctica, de los estudios filosóficos que educan y perfeccionan el entendimiento y sin cuyo auxilio la ciencia es el empirismo.

El segundo obstáculo que hillé para la publicación de mis ideas lo hallo aun hoy. Las obras que no llevan cierto sello, pierden el mérito que puedan tener; y el pobre Autor ó se ve obligado a venderlas al comercio á un insimo precio, ó tiene que costear la impresión para no reembolsar el capital empleado, si no con gran trabajo, si no lo pierde, porque también los libros tienen sus circunstancias y su fortuna. Y la verdad sea dicha: es muy doloroso que el fruto de afanes literarios no solo no sea lucrativo, sino que perjudique los intereses del que ha trabajado con el fin recto de hacer algo en bien de la humanidad y de la ciencia.

No entrare, pues, en la publicación de la obra sin á lo menos asegurar los gastos de impresión. Ni gloria, ni interés busco. Cercas de veinte años de enseñanza de fisiología me impusieron el deber de publicar el Ensayo de Antropología. Quince años de enseñanza de Clínica-médica me impelen á presentar mis ideas sobre el complemento de los estudios médicos, y á hacer la aplicación práctica de los elevados principios de la ciencia. Cercas de cuarenta años de una práctica extensa y no interrumpida me autorizan para escribir He aquí mi justificación, si alguno me juzgase atrevido, al presentarme en el palenque en que hombres eminentes razonan y discuten.

Los que gusten suscribirse, nada tienen que adelantar y recibirán una cédula que los acredite tales, para que e'los únicamente obtengan la ventaja concedida á los suscriptores, que será la de recibir la obra al entregar la cédula, por el mas módico precio posible.

Se cerrará la suscripción asegurados que sean los gastos que aproximadamente causaré la publicación, y en la primera página se publicará la lista de suscriptores.

Santiago 8 de enero de 1859.—José Varela de Montes.

Puntos de suscripción. En Madrid, Sres. Bailly Baillyere y Calleja.—En Santiago, Calleja y Escribano.

NOTA. Se piden las cédulas por carta francesa, expresando la dirección; ó en las librerías anunciadas.